Que expide la Ley del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información, y reforma los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Silvia Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados presento para su consideración y aprobación el presente proyecto de decreto por el que se aprueba la Ley que Crea y Reforma el Organismo Público Descentralizado con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información (IMET), presentado por la Diputada Silvia Fernández Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Planteamiento del problema

En los últimos años, las Tecnologías de la Información se han convertido en un componente indispensable para el desarrollo mundial; no obstante, nuestro país se encuentra en un proceso inacabado que no le permite incorporarse al conjunto de naciones que van a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, siendo este un motivo importante por el que la sociedad no es incluida dentro de la comunidad de la información global.

Ante este problema, la iniciativa que proponemos tiene como bastión la creación de un Instituto que implemente políticas y regule acciones para el desarrollo de las Tecnologías de la Información de manera transversal, en la administración pública federal en coordinación con los estados y municipios que conforman la República Mexicana.

Es evidente que la productividad de un país es directamente proporcional al desarrollo de su tecnología, en este tenor, México está posicionado en el lugar 78 del Índice de Desarrollo Tecnológico en un total de 138 países; lo anterior de conformidad al reporte global de las “Tecnologías de Información 2010-2011” del Foro Económico Mundial, y en el lugar 66 en el Índice de Competitividad Global para el mismo periodo.

Por otro lado, sabemos que el desarrollo de las Tecnologías de la Información debe tener, principalmente, un beneficio social, puesto que un crecimiento que sólo beneficia a determinado sector, es signo de desequilibrios y deficientes programas de gobierno, que no buscan reducir la brecha digital, siendo que el uso de las TIC’s al penetrar en una sociedad incrementa sus potenciales y capacidades, razón por la cual, al no contar con ellas se puede presentar mayor marginación en los grupos que actualmente se encuentran en esta situación.

Argumentación

Como es sabido, actualmente el avance de las tecnologías en nuestro país ha sido significativo; sin embargo, a pesar del discurso oficial y de los diversos proyectos que se han puesto en marcha desde el Poder Ejecutivo, un estudio reciente del Consejo Mexicano para la Competitividad (IMCO), colocó a México, en el año 2009, en el lugar 77 de un total de 161 países dentro del Índice de Desarrollo Tecnológico, el cual es elaborado por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Este Índice mide la existencia física de suministro de servicios, la existencia de equipos de cómputo y otros equipos electrónicos así como el nivel de capacitación técnica para la operación de los mismos.

En Latinoamérica, México se ubica en el lugar 15 de un total de 25, detrás de países como Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Venezuela y Colombia, a pesar de ser la segunda economía más grande de la región, tan sólo detrás de Brasil, que hace una década lideraba a las economías de nuestro continente.

Si bien, las acciones que se han emprendido a partir de diciembre de 2001, cuando fue creada por decreto la “Coordinación General del Sistema e-México”, han construido un espacio de convergencia de proyectos y servicios por medio de la conectividad de internet, pero han sido insuficientes para implementar una política de Estado.

En cuanto a quien debe generar una política informática a nivel nacional, se ha dado una serie de modificaciones al respecto, ya que anterior a la reforma de la ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el año 2003 le correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), participar en esta tarea. De igual forma, esta reforma trajo consigo la creación de la Secretaria de la Función Pública, que vendría a sustituir a la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, misma que incorpora dentro de su estructura a la Unidad de Gobierno Digital, que tiene por objeto el promover las estrategias necesarias, para establecer políticas de gobierno electrónico. Pero si bien es cierto, la Secretaría de la Función Pública, busca que las actividades y responsabilidades del sector público, puedan realizarse a cabalidad mediante el uso de los recursos destinados para este fin, se puede percibir como un ambiente limitado a la visión que se debe tener para que el desarrollo y aprovechamiento de las TIC’s en México sirvan como motor del desarrollo económico, político y social.

Actualmente existen diversas propuestas de política pública para impulsar la competitividad y el desarrollo de las Tecnologías de la Información por medio de una Agenda Digital Nacional, entre las que destaca la de “Alianza ADN” México. La cual reconoce esfuerzos importantes del gobierno federal, pero que han sido aislados. También reconoce los avances de la industria del sector y del mismo marco normativo que está vigente, así como del que se encuentra en análisis por parte del Poder Legislativo.

Las cifras nos indican que es necesario realizar un cambio urgente en la política del desarrollo tecnológico y de la conectividad, ya que según datos del INEGI en 2010, en nuestro país el 40% de los mexicanos tenía acceso a una computadora y solo el 33% de los mexicanos tenía acceso a internet, mientras que en Brasil el 38% de la población cuenta con este servicio, cifra superior a la media mundial que es de 28.7% y al promedio en la zona que es de 34.5%. De igual forma, según datos de la Cofetel, en ese mismo año, el 18% de la población contaba con una línea de telefonía fija y el 77% contaban con una línea telefónica móvil, siendo en este mismo rubro, que Brasil cuenta con casi el 90% de la población con una línea móvil de teléfono. Por otra parte, en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el año 2011, México creció 10% en la conectividad de banda ancha; sin embargo, ese avance medido entre los países miembros de la OCDE, lo colocaron en el lugar 22 de 34 países.

Finalmente, el reciente informe del IMCO sobre nuestro país –en comparación con los que integran los Bric’s, es decir: Brasil, Rusia, India y China–, nos coloca en una clasificación de “bajo” en relación con el Índice de Sofisticación e Innovación, que mide, entre otros aspectos, el gasto en investigación y desarrollo, exportaciones de alta tecnología, número de investigadores y coeficiente de inversión.

Existen programas como el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, conocido como Foncos, creado en el año de 2002 cuyo objetivo es dotar de infraestructura y servicios a las comunidades rurales y urbanas marginadas. Este Fondo está dirigido por un Comité Técnico y un Fideicomiso que administra los recursos asignados por el Poder Legislativo. Este Fideicomiso lo integran representantes de seis Secretarías de Estado (SCT, SHCP, SE, Sedesol, SEP y SSA), presidido por el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) y con la participación de dos representantes Propietarios y sus respectivos suplentes, del sector Privado de Telecomunicaciones.

Sin embargo, es lamentable que al 30 de septiembre del año 2011, y según el Informe de la Auditoría Superior de la Federación 2009, aún existan más de 555 millones de pesos disponibles que no se han aplicado a ningún proyecto, y poco más de 370 millones que tampoco se han complementado en las dos únicas líneas de acción que se han aprobado para el desarrollo de los programas de cobertura social en comunidades de escasos recursos.

Actualmente la organización gubernamental de las Tecnologías de la Información y Conocimiento en México, cuenta con dos instancias: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la cual implementa, coordina y supervisa el Sistema e-México y la Unidad de Gobierno Digital, la cual depende de la Subsecretaría de la Función Pública dentro de la Secretaría de la Función Pública.

La principal diferencia entre estas dos unidades de gobierno está en el enfoque y especialización que le dan a las TIC’s, pues mientras la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento se orienta hacía posibilitar el acceso de las tecnologías y conocimientos a la sociedad en general , además de brindar servicios tecnológicos a la población, la Unidad de Gobierno Digital está dirigida a implementar las tecnologías dentro de la Administración Pública Federal y entidades de gobierno para su funcionamiento intergubernamental.

Las atribuciones de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, según el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su Artículo 26 señalan:

• Es responsable de los programas, recursos, acuerdos, convenios y compromisos de cualquier índole que correspondan a la Sociedad de la Información y el Conocimiento;

• Propone e implementa las políticas públicas del Sistema Nacional e-México; además de promover el acceso universal a los servicios de dichas tecnologías;

• Coordina las actividades de las dependencias, las entidades y, en general, de todos los agentes participantes en el Sistema Nacional e-México,

• También propone nuevos proyectos y los implementa, en materia de conectividad, sistemas y contenidos,

• Coadyuva en el desarrollo de las infraestructuras de Tecnologías de la Información y el Conocimiento en los gobiernos, la academia y la industria;

• Contribuye al mejoramiento del uso y aprovechamiento de las telecomunicaciones en relación con las tecnologías de la sociedad de la información y del conocimiento entre las dependencias de la Administración Pública Federal, y entre ésta y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como con la población en general, conforme a los programas, estrategias, políticas y convenios, dentro del marco del Sistema Nacional e-México;

• Participa en la negociación de instrumentos jurídicos en materia de las tecnologías de la sociedad de la información y del conocimiento,

• Promueve y coordina estudios, investigaciones y acciones que coadyuven al desarrollo y adopción de las tecnologías de la sociedad de la información y del conocimiento así como su alfabetización, adopción y apropiamiento, para su uso y culturización.



En cuanto a las Atribuciones de la Unidad de Gobierno Digital , el Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública precisa en su Artículo 18, las siguientes:

• Define, instrumenta y da seguimiento a la estrategia de Gobierno Digital en el ámbito de las dependencias, las entidades y la Procuraduría;

• Elabora las disposiciones administrativas que debe emitir la Secretaría a fin de coordinar en el ámbito de las dependencias, las entidades y la Procuraduría el establecimiento de las políticas y programas en materia de Gobierno Digital y tecnologías de la información y comunicaciones;

• También emite criterios técnicos, metodologías, guías, instructivos o demás instrumentos análogos, así como dirigir y coordinar la formulación de los estudios necesarios en materia de Gobierno Digital;

• Determina, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las políticas que seguirán las dependencias, las entidades y la Procuraduría para la planeación, ejecución y evaluación del presupuesto destinado a las tecnologías de información y comunicaciones;

• Apoya a la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de tratados, convenios o acuerdos internacionales que establezcan derechos y obligaciones en materia de Gobierno Digital;

• Establece mecanismos de coordinación con las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como la coordinación con los gobiernos estatales y municipales, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y la sociedad en general con la finalidad de impulsar el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicaciones;

• Instrumenta y administra soluciones estratégicas que permitan la operación de procesos gubernamentales y servicios digitales,

• Promueve el establecimiento y el uso de soluciones estratégicas a los particulares, como un medio de consulta o acceso a los procedimientos administrativos y trámites del Gobierno Federal;

• Determina los indicadores y mecanismos de medición con la finalidad de elevar la eficiencia y eficacia gubernamental;

• Establece las acciones requeridas para homologar, implantar y promover los medios de identificación electrónica, así como administrar y controlar los certificados de firma electrónica avanzada emitidos por la Secretaría;

• Coordina la estrategia de digitalización de trámites y servicios gubernamentales, así como de los procesos entre las dependencias, las entidades y la Procuraduría;

• Administra el portal de información y servicios digitales del gobierno federal.



También existe una Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico que trabaja de la mano de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, de hecho, esta Comisión Intersecretarial es presidida por el titular de la Secretaría de la Función Pública. Además, el Secretario Ejecutivo de la Comisión es el Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública.

La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, creada el 9 de diciembre de 2005, a través de un acuerdo presidencial para llevar a cabo el fortalecimiento de la coordinación entre entidades de gobierno en materia de Gobierno Digital, publicado en esa fecha en el Diario Oficial de la Federación, está formada (según el mismo acuerdo) por los titulares de las dependencias que integran la Administración Pública Federal Centralizada en términos de los Artículos 1o y 2o de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal).

También cuenta con invitados especiales permanentes: el Titular de la Oficina de la Presidencia de la República para la Innovación Gubernamental; el Titular del SAT, y los titulares de la Comisión Federal de Electricidad; del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; del Instituto Mexicano del Seguro Social y de Petróleos Mexicanos.

La Comisión tiene la atribución de conocer y opinar sobre el programa anual de la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública y su Consejo Ejecutivo, que lo conforman los titulares de las UTIC’s de las dependencias de gobierno y, además, es presidido por el Titular de la Unidad de Gobierno Digital.

El campo de acción de las TIC’s es muy amplio. Por mencionar sólo algunos, en el ámbito educativo se pueden potenciar los recursos de aprendizaje de libre acceso, definidos por la Unesco como materiales didácticos, de aprendizaje o de investigación que están en el dominio público y pueden ser usados mediante una licencia de propiedad intelectual, que permite su reutilización o adaptación, en particular en contextos donde los recursos son escasos, pero también pueden acceder a ellos quienes se desenvuelvan en el campo de la medicina, la agricultura, el medio ambiente y la economía entre muchos otros.

Por otro lado, sabemos que es necesario realizar un estudio que permita conocer cuáles son las necesidades en recursos humanos del sector de las Tecnologías de la Información para verificar si pueden ser cubiertas en el corto y mediano plazo, y cuáles serían los costos para nuestro país en caso de estar preparando a los suficientes profesionales en la materia.

Por ello, es preciso pasar de una política, que ha sido deficiente y limitada, a una política de estado, que consolide una estrategia transversal de desarrollo de las TIC’s más allá de los cambios de gobierno. También la creación de un organismo descentralizado con autonomía jurídica y patrimonio propios que responda a la imperante necesidad de impulso de las Tecnologías de la Información en coordinación con todas las dependencias del gobierno, la investigación científica y tecnológica para la definición de una estrategia integral oportuna y urgente. Este nuevo organismo absorbería las funciones, obligaciones y recursos presupuestales de la actual Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento que hoy depende de la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes y de la Unidad de Gobierno Digital que depende de la Subsecretaría de la Función Pública del gobierno federal , además de reincorporar las tares de coordinación y comunicación con el INEGI, en relación a sus actividades estadísticas y de información en el rubro de las TIC’s. Lo anterior, para que el desarrollo y transición hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento sea verdaderamente una política de Estado en México.

Fundamento legal

La suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se aprueba la Ley que Crea y Reforma el Organismo Público Descentralizado con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información (IMET).

Primero. Se crea, la Ley del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información.

Artículo 1. Se crea el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información como un organismo público descentralizado con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, administrativo descentralizado, adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Artículo 2. El Instituto tiene como objeto definir, analizar, evaluar e instrumentar las políticas públicas para el desarrollo tecnológico y así llevar al país a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Además de ser un órgano consultivo de las políticas públicas que involucren el uso de las tecnologías de la información en los gobiernos estatales, municipales y demás órganos descentralizados del sector público, con el fin de fortalecer y consolidar a este sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a los programas respectivos.

Lo anterior con el ánimo de que exista una homologación de criterios, certificación de acciones y condición normativa que permita que las políticas públicas que se implementen en el uso de las Tecnologías de la Información y lleven a niveles de mayor competitividad al país.

Artículo 3. El Instituto tendrá como funciones las siguientes:

I. Definir e instrumentar la política nacional basada en el uso de las Tecnologías de la Información que se implementan en la administración pública federal;

II. Emitir los lineamientos que en materia de aplicación de las Tecnologías de la Información deberán observar las entidades de la administración pública federal, y en la elaboración de programas institucionales de desarrollo de la informática.

III. Propiciar condiciones favorables para el crecimiento y fortalecimiento del sector, mediante la consolidación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones con los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como los recursos derivados de los convenios que se establezcan con las entidades federativas, municipios y organismos públicos, privados y de la sociedad civil del sector;

IV. Formular y ejecutar programas y proyectos de desarrollo de las Tecnologías de la Información de mediano y largo plazo donde participen representantes de los sectores públicos, privados y sociales para garantizar su aplicación, evaluación y resultados.

V. Promover el uso adecuado de las Tecnologías de la Información en los sectores público y privado como elemento de apoyo para mejorar la eficiencia administrativa, la competitividad de la industria y la calidad de los productos y servicios.

VI. Participar en la elaboración de los lineamientos particulares del sector para que sean incluidos en Plan Nacional de Desarrollo, en términos de lo dispuesto por la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables a las actividades de desarrollo de Tecnologías de la Información (TIC’s).

VII. Ser órgano consultivo de los estados, municipios y de organizaciones de la sociedad civil en la formulación de políticas de las Tecnologías de la Información, en términos de su reglamento y demás disposiciones aplicables, mediante asesorías, capacitación, monitoreo tecnológico y cooperación técnica;

VIII. Llevar a cabo estudios e investigaciones en coordinación con instituciones académicas públicas, privadas y centros de investigación, así como elaborar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de los Organismos del Sector y de su entorno, para el mejor cumplimiento de su objeto;

IX. Promover el desarrollo y transición hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la sociedad en general, y fomentar la formación de especialistas, la investigación y el desarrollo industrial en la materia, en coordinación con las instancias competentes.

Artículo 4. Las dependencias de la Administración Pública Federal, los organismos públicos descentralizados y demás instituciones de carácter federal, deberán sujetarse a las recomendaciones y lineamientos que el Instituto emita en materia de adquisiciones e infraestructura para el desarrollo de las Tecnologías de la Información. Así como todo equipamiento que se realice con recursos públicos federales.

Artículo 5. El Instituto contará con los siguientes recursos para el cumplimiento de su objeto:

I. Los recursos que se le asignen a través de la Secretaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

II. Los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base en cualquier título legal; y

III. Los subsidios, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones contrarias a su objeto conforme lo establece la ley.

Artículo 6. Para la consecución de su objeto y para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto se integrará de los órganos siguientes:

I. Una Junta Directiva, integrada por el director general y seis consejeros electos designados, dos por cada organismo del sector social, del sector industrial y por la Cámara de Diputados;

II. Un director general, designado y removido libremente por el titular del Ejecutivo Federal a propuesta del Secretario de Comunicaciones y Trasportes, y

III. Las instancias, unidades administrativas y servidores públicos necesarios para la consecución de su objeto.

Artículo 7. La Junta Directiva sesionará por lo menos cada tres meses y tomará sus acuerdos, recomendaciones y resoluciones por voto de mayoría.

Podrá sesionar de manera extraordinaria cuando la situación así lo amerite según lo establezca el Reglamento del Instituto. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.

Son atribuciones indelegables de la Junta Directiva:

I. Vigilar la correcta administración del Fondo y demás recursos financieros;

II. Aprobar el programa anual de actividades del Instituto;

III. Aprobar el informe de labores anual que presente el director general del Instituto;

IV. Aprobar el anteproyecto de presupuesto que emitirá el Instituto a través de la Secretaría;

V. Aprobar los programas y acciones de desarrollo tecnológico y de la sociedad de la información que realizará el Instituto; y

VI. Las demás que señale el Reglamento del Instituto.

Artículo 8. El director general, de acuerdo con lo que se establezca en el Reglamento del Instituto, podrá ejercer su representación legal, y además tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar el programa anual de actividades del Instituto;

II. Elaborar, proponer y someter a consideración de la Junta Directiva, para su aprobación, los programas y acciones de desarrollo de las tecnologías de la información.

III. Designar a los servidores públicos en las jerarquías inferiores a sí mismo, considerando para tales funciones a quienes tengan amplia experiencia y conocimiento en temas relacionados con las Tecnologías de la Información;

IV. Presentar a la Junta Directiva el anteproyecto de presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal correspondiente;

V. Presentar un informe anual de actividades; y

VI. Las demás que señale el Reglamento del Instituto.

Segundo. Se reforma el artículo 36 fracción XXVI y 37 fracciones XIX y XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.



Artículos Transitorios. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2012.

Diputados: Silvia Fernández Martínez, Emilio Chuayffet Chemor, Eduardo Zarzosa Sánchez, Ricardo Sánchez Gálvez, Héctor Guevara Ramírez, José Adán Ignacio Rubí Salazar, Armando Neyra Chávez, Héctor Hernández Silva, Miguel Ángel Terrón Mendoza, Omar Rodríguez Cisneros, J. Eduardo Yáñez Montaño, Fausto Sergio Saldaña del Moral, Rodrigo Reina Liceaga, Luis Félix Rodríguez Sosa, Olivia Guillén Padilla, David Hernández Pérez, Jorge Humberto López-Portillo Basave, Roberto Rebollo Vivero, Arturo Zamora Jiménez, Francisco Alejandro Moreno Merino, Clara Gómez Caro, Salma Meza Manjarrez, Nicolás Carlos Bellizia Aboaf, Daniel Granja Peniche, María Ester Alonzo Morales, Efraín Aguilar Góngora, Eric Luis Rubio Barthell, Liborio Vidal Aguilar, Miguel Ernesto Pompa Corella, José Luis Soto Oseguera, Héctor Pedroza Jiménez, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Rodrigo Pérez-Alonso González , Jesús Alfonso Navarrete Prida, María de Jesús Aguirre Maldonado, Raúl Domínguez Rex, Sandra Méndez Hernández, Francisco Lauro Rojas San Román, Luis Antonio Martínez Armengol, Manuel Cadena Morales, Víctor Humberto Benítez Treviño, Diana Patricia González Soto, Josefina Rodarte Ayala, Diva Hadamira Gastelum Bajo, Delia Guerrero Coronado, Andrés Aguirre Romero, Noé Martín Vázquez Pérez, Felipe Borja Texocotitla, Jorge Carlos Ramírez Marín, Marcela Vieyra Alamilla, Lily Fabiola de la Rosa Cortez, Blanca Luz Soto Plata, María de la Paz Quiñones Cornejo, Susana Hurtado Vallejo, José Luis Velasco Lino, Héctor Eduardo Velasco Monroy, Jesús Ricardo Enríquez Fuentes, María del Rosario Brindis Álvarez, Rafael Pacchiano Alamán , Sergio Mancilla Zayas, Armando Corona Rivera, Fernando Ferreyra Olivares, Inocencio Ibarra Piña, Jorge Hernández Hernández, Reyna Araceli Tirado Gálvez, Adolfo de la Garza Malacara, Óscar Guillermo Levín Coppel, José Ignacio Pichardo Lechuga, Humberto Lepe Lepe, José Alfredo Torres Huitrón (rúbricas).